

Privatizaciones

Las reacciones que la crisis económica ha suscitado en el mundo occidental han sido de diferente naturaleza a ambos lados del Atlántico: mientras Estados Unidos se repliega sobre sí mismo para proteger su mercado interno, la CEE no parece encontrar una fórmula común para sus Estados miembros, si bien una corriente de privatizaciones de las industrias estatales se está desarrollando en algunos países de la CEE.

España, en particular, que lucha por unirse a la Europa de gran velocidad, se encuentra en una dramática situación de empobrecimiento de las arcas públicas, consecuencia, en parte, de la recesión mundial y, en parte, de los ostentosos gastos e inversiones realizados con motivo de nuestras celebraciones de años pasados. Es lamentable que estos gastos se hayan realizado sobre todo en compras al exterior, y no se haya aprovechado la oportunidad de estas inversiones para dar un empujón a nuestra maltrecha industria.

El Estado español, en línea con la corriente europea y en su búsqueda de fondos para reducir el déficit público, ha encontrado en la privatización de empresas públicas una fórmula rápida para mejorar la situación de sus arcas. Dos son las razones fundamentales esgrimidas por el gobierno para justificar esta venta de sus empresas: la posibilidad de conseguir fondos para el Estado, y la confianza en la mejor calidad de gestión por parte del sector privado. Ambas razones son susceptibles de ciertas matizaciones.

La privatización de empresas priva al gobierno, por una parte del control de una herramienta generadora de empleo, riqueza, y soberanía sobre un sector básico de la economía nacional.

Si tenemos en cuenta que, parejo a este proceso de privatización, se va a desarrollar el proceso de liberalización de ciertos servicios básicos para la sociedad, cabe reflexionar acerca de quién va a tener el control al cabo de unos años para tomar decisiones sobre el rumbo que deben seguir los sectores industrial y de servicios de nuestro país. Decisiones que pueden ser estratégicas para el conjunto de la sociedad española.

Si la única salida para nuestras empresas públicas es la privatización, un principio básico de ese proceso debe ser el de mantener el control de la empresa dentro de España. Y ello podría lograrse bien porque el reparto accionarial así lo garantice, o porque el socio mayoritario, no siendo el Estado, sea un grupo privado

español. Así actúan en países de nuestro entorno. En Francia, el debate podrá ser si el capital de sus empresas será, o no, público; pero pocos dudan de que deberá seguir siendo francés. El capital, en contra de lo que muchos quieren creer, porque les beneficia, tiene corazón y nacionalidad, y es bueno y saludable, y hasta necesario, que las empresas españolas estén en manos de españoles.

Es cierto que no abundan en España las vocaciones de empresarios industriales; pero no es menos cierto que la política económica de los pasados años en nuestro país ha contribuido bien poco al desarrollo de esas vocaciones. Se ha fomentado el crecimiento rápido y fácil a través de negocios especulativos y no se ha favorecido en absoluto la inversión en creación de tejido empresarial industrial que produce resultados a más largo plazo y con más riesgo, si bien al final es la única riqueza real de que dispone un país.

Hay que dar un giro radical a esa política y desarrollar una política industrial a través de incentivos a la inversión industrial privada española que permita que, a medio plazo, podamos ser alguien en el concierto de las naciones desarrolladas. A nadie se le oculta que esto es difícil; pero jamás se resolverá simplemente vendiendo al mejor postor, venga éste de donde venga.

El otro gran argumento es el de la mejora de la gestión. No cabe duda de que la toma de decisiones y la gestión empresarial es mucho más eficaz en la empresa privada que en la de titularidad pública, no obstante, es absolutamente imprescindible asegurarse de los intereses a medio y largo plazo de estos gestores privados.

El reciente caso de SEAT es, en este sentido, paradigmático. La gestión privada y de alta reputación alemana de VW ha llevado a la empresa a una situación de grandes pérdidas financieras, posiblemente en favor de otras empresas alemanas suministradoras de piezas para SEAT. La pérdida de control por parte del Estado español costó casi 300.000 millones de pesetas hace menos de cinco años y hoy se plantea una situación que va a ser difícil resolver.

Probablemente sea éste el momento de señalar que hay mucho responsable público que piensa que un problema deja de serlo cuando él, y el Estado, se lo quitan de encima.